

CASO RADICAL RADIO Y OTROS vs. CHIRILAGUA

ESTADO

ÍNDICE

1. BIBLIOGRAFÍA.....	4
1.1 Libros y Documentos legales.	4
1.1.1 Libros.	4
1.1.2 Instrumentos internacionales.	4
1.2 Casos legales citados.	5
1.2.1 Corte Europea.	5
1.2.2 Corte Interamericana de Derechos Humanos.	5
1.2.3 Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	7
2. INTRODUCCIÓN A LA CAUSA.....	9
2. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS	10
2.1 La Papeleta de la democracia y el Facebookazo	11
2.2 Medidas adoptadas por el Gobierno como consecuencia del Facebookazo.....	15
2.3 Procedimiento ante el Sistema Interamericano	19
3. ANÁLISIS LEGAL DEL CASO	21
3.1 Criterios preliminares de admisibilidad.....	21
3.1.1 Primera excepción: Falta de agotamiento de recursos internos. Art.46 literal a. Convención Americana sobre Derechos Humanos	21
3.1.2 Segunda Excepción: Improcedencia del caso ante la jurisdicción de la Corte IDH por tratarse de personas jurídicas acudiendo en calidad de víctimas ante la protección del Sistema Interamericano. Art. 1 inciso 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos	23
3.2 Cuestiones de fondo.....	24

3.2.1 Violación a los derechos contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación a los artículos 1.1 y 2 de la misma. Derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales.	24
3.2.2 Violación al derecho contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a los artículos 1.1 y 2 de la misma. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión.	29
4. PETITORIO	37

1. BIBLIOGRAFÍA

1.1 Libros y Documentos legales.

1.1.1 Libros.

- García Ramírez, Sergio. Gonza, Alejandra. La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos. Corte Interamericana de Derecho Humanos, Comisión de derechos humanos del distrito federal. Edición 2007. Párrs. 31 y 32. **Citado en el párrafo 55.**
- Bertoni, Eduardo Andrés. Libertad de expresión en el Estado de derecho: doctrina y jurisprudencia nacional, extranjera e internacional. 2ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Del Puerto, 2007. Pág.66. **Citado en el párrafo 58.**

1.1.2 Instrumentos internacionales.

- Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José 1969. **Citado en los párrafos 35 y siguientes.**
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos, 1966”. Adaptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966. **Citado en el párrafo 67.**
- Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado por la Comisión en su sesión 137 de periodo ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009. **Citado en el párrafo**

- Declaración Universal de los derechos del hombre. 1948 Asamblea general de Naciones Unidas. **Citado en el párrafo 67.**

1.2 Casos legales citados.

1.2.1 Corte Europea.

- Eur Court H.R. Motta v. Italy, Judgment of 19 February, 1991, Series A No. 195-A. **Citado en el párrafo 54.**
- Eur Court H.R. Ruiz-Mateos v. Spain, Judgment of 23 June, 1993, Series A No.262. **Citado en el párrafo 54.**

1.2.2 Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- H. Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, serie A, N5. **Citado en el párrafo 55 y 70.**
- H. Corte IDH. Caso Cantos vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. **Citado en el párrafo 39.**
- H. Corte IDH. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000, (Fondo, Reparaciones y Costas). **Citado en el párrafo 41 y 43.**
- H. Corte IDH. Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Sentencia del 16 de agosto de 2000 (Fondo). **Citado en el párrafo 41.**

- H. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia del 30 de mayo de 1999 (Fondo, reparaciones y costas). **Citado en el párrafo 41.**
- H. Corte IDH. Caso Paniagua Morales y otros vs. Guatemala. Sentencia del 8 de marzo de 1998 (Fondo). **Citado en el párrafo 41.**
- H. Corte IDH. Caso Blake vs Guatemala. Sentencia de 24 de enero de 1998 (Fondo) **Citado en el párrafo 41.**
- H Corte IDH. Caso Castillo Páez vs. Perú. Sentencia del 3 de noviembre de 1997 (Fondo). **Citado en el párrafo 41.**
- H. Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Sentencia del 12 de noviembre de 1997 (Fondo). **Citado en el párrafo 41 y 54.**
- H. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Sentencia de 31 de agosto de 2000 (Fondo, reparaciones y costas). **Citado en el párrafo 43.**
- H. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2000 (Fondo, reparaciones y costas). **Citado en el párrafo 43.**
- H. Corte IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas). **Citado en el párrafo 43.**
- H. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas). **Citado en el párrafos 49, 54, 55 y 69.**

- H. Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Sentencia del 5 de julio de 2004 (Fondo, reparaciones y costas). **Citado en el párrafo 54.**
- H. Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 21 de junio de 2002 (Fondo). **Citado en el párrafo 54**
- H. Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, reparaciones y costas). **Citado en el párrafos 55 y 70.**
- H. Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006 (Fondo, reparaciones y costas). **Citado en el párrafo 55.**
- H. Corte IDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, serie C, núm. 135. **Citado en el párrafos 55 y 70.**
- H. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004, serie C, núm. 107. **Citado en el párrafos 55, 59, 60 y 70.**
- H. Corte IDH. Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008, (Fondo, Reparaciones y Costas). **Citado en el párrafo 70.**

1.2.3 Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe N° 10/91 del 22.II.1991, Banco de Lima – Perú . **Citado en el párrafo 38.**
- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe N° 39/99 del 11.III.1999, Mevopal, S.A.-Argentina. **Citado en el párrafo 38.**

- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe N° 47/97 Tabacalera Boquerón S.A vs. Paraguay. 16 de octubre de 1997. **Citado en el párrafo 38.**
- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe No. 67 del 14 de junio de 2001. Caso 11.859. Tomás Enrique Carvallo Quintana vs. Argentina. **Citado en el párrafo 39.**

2. INTRODUCCIÓN A LA CAUSA

1. La República Federativa de Chirilagua, en adelante El Estado ó Chirilagua, comparece ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante H. Corte IDH, como respuesta a la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH, en el caso Radical Radio y otro vs. Chirilagua.
2. Se permite el Estado allegar su memorial de defensa en tanto el caso fue sometido a la jurisdicción de la H. Corte IDH el 25 de diciembre de 2009 alegándose la violación a los arts. 8, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el art. 1.1 de la misma.
3. El Estado comparece ante la H. Corte IDH para solicitar que ésta declare la ausencia de responsabilidad internacional en concordancia a los hechos relatados posteriormente en relación a las emisoras Radical Radio, Radio Su-versión, a la señora Melanie Pereira Peroni y los señores Francis Hoffman y William Garra.

2. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

4. La República Federativa de Chirilagua es un Estado democrático, en el cual a lo largo de la historia se han alternado el poder dos partidos tradicionales (Partido Chirilagüense Popular -PCP- y el Partido por la Renovación Democrática de Chirilagua –RDC-); como consecuencia de su carácter democrático los poderes legislativo y ejecutivo se renuevan cada 4 años por medio de elección popular. Chirilagua es un Estado Autónomo desde inicios del siglo XIX cuando alcanzó su independencia de España e Inglaterra. Con el fin de lograr una certera protección de los derechos de sus ciudadanos participó en la negociación de la Carta de la Organización de Estado Americanos (OEA) en el año de 1948, del mismo modo ha ratificado todos los tratados interamericanos de derechos humanos y los principales tratados de derechos humanos de la ONU.
5. En el año de 2006 el candidato presidencial del PCP, Atilio Escalante Norris, accedió a la presidencia de la República con el apoyo del 60% de la población y varios empresarios del país. Según encuestas de opinión el gobierno del presidente Escalante Norris cuenta con una aprobación del 80% de la población, esto debido a las excelentes medidas adoptadas por el gobierno, tales como la exención de impuestos a capitales extranjeros lo cual ha afianzado la economía del mercado fomentando la libre competencia internacional e incrementando la inversión extranjera. Del mismo modo se han implementado medidas que redimensionan la reinversión de las ganancias obtenidas en la venta del cobre,

principal producto de exportación del país, lo cual permite que el Estado esté catalogado como de renta media-alta.

2.1 La Papeleta de la democracia y el Facebookazo

6. Partidarios políticos del gobierno del presidente Escalante han promovido una reforma Constitucional para permitir un segundo mandato de éste, con tal fin se lanzó la propuesta de incluir en las elecciones generales para Diputados Federales de 2008 una consulta popular denominada “La Papeleta de la democracia”, la cual permitiría determinar cuántos de los Chirilagüenses quisieran continuar cuatro años más con el gobierno Escalante. Sería pues una forma democrática de continuar incentivando la propuesta de reforma Constitucional, aunque debe aclararse que esta consulta popular no se encuentra consagrada en la Constitución como un mecanismo de reforma de la misma.
7. La oposición (RDC) y varios medios de comunicación pretendieron demeritar los medios democráticos creados por la Constitución para consultar al pueblo, malinterpretando el espíritu del mecanismo, al considerar posible la validación por vías de hecho de dicho medio para perpetuar el gobierno actual.
8. Un grupo de estudiantes convocaron a una marcha en contra de la iniciativa de la Papeleta de la democracia, dos meses antes de esta ocurrir, la cual fue popularmente conocida como “el Facebookazo” en tanto fue convocada por redes sociales tales como Facebook,

My Space y Twitter, y apoyada por cadenas de radio tales como Radical Radio y Radio Su-versión.

9. El propósito material de la concentración, que se realizaría una semana antes de las elecciones para Diputados Federales, era desestabilizar las instituciones democráticas del país y crear un clima de miedo general en la población, así como enviar un mensaje equivocado a la sociedad civil acerca del carácter democrático del país; todo esto dirigido a lograr abstencionismo en las elecciones a causa del miedo, lo cual demuestra el temor que sienten los entusiastas del Facebookazo frente a la participación ciudadana que seguramente legitimaría al Presidente Escalante.
10. Efectivamente el Facebookazo se realizó el 3 de marzo de 2008 en varias ciudades del país y generó, tal como el gobierno había previsto, enfrentamientos violentos los cuales dejaron muertos y un gran saldo de heridos. Algunos medios de comunicación (Radical Radio y Radio Su-versión) instigaron a los manifestantes a la violencia antes y durante la marcha por medio de un discurso de odio nacional.
11. La emisora Radical Radio presenta, durante la franja de mayor audiencia, un programa político en el cual se ridiculiza la figura del presidente Escalante Norris, por medio del personaje “Fatilio Estafante” el cual es señalado como “un señorito feudal, bueno para nada, insensible, voraz y corrupto”, la imitación es realizada por el periodista y locutor William Garra. Este programa es señalado entre la población como un promotor de conflictos sociales por la tierra.

12. Como una de las cadenas radiales que más apoyó la iniciativa del Facebookazo, Radical Radio dedicó uno de sus programas, días antes de la manifestación, a exaltar aquellos grupos con contenido agresivo¹ de la red social Facebook que hacían referencia al presidente Escalante. Asimismo mientras se desarrollaba la marcha William Garra narró los sucesos y concluyo invitando a los manifestantes a “defender sus derechos a toda costa contra la avanzada autoritaria de la oligarquía terrateniente.”
13. Otra de las emisoras simpatizantes del Facebookazo fue Radio Su-versión, la cual al ser una pequeña emisora del municipio de San Pedro de los Aguados se encuentra aliada con Radical Radio, que con el fin de aportar elementos políticos a su locución retransmite varios de sus programas.
14. Radio Su-Versión se configura como una emisora comunitaria propiedad de ACOSINTI (Asociación de comunidades sin tierra de San Pedro de los Aguados), que funciona sin licencia de radio difusión sonora, usando de forma ilegal el espectro electromagnético de acuerdo al art. 27 de la Constitución Política de Chirilagua.
15. ACOSINTI ha presentado 14 peticiones a lo largo de 19 años a las autoridades competentes, con el fin de lograr el otorgamiento de una licencia de radio difusión sonora, sin embargo en tanto dicha potestad se encuentra en cabeza del Estado la licencia a la fecha no ha sido concedida. A raíz de esto ACOSINTI interpuso una acción de constitucionalidad contra el Servicio Comunitario de Radio Difusión Sonora (órgano

¹ Algunos de ellos: “Los que odiamos, repudiamos y aborrecemos a Atilio Escalante Norris”, “Yo también quiero que se muera Atilio Escalante Norris y todos los terratenientes que nos han explotado”, “La marcha es una bomba dirigible a ti Escalante Norris”, “Como darle en la madre al ricachón insensible de Atilio Escalante”.

perteneciente a la Comisión Federal de Regulación de Telecomunicaciones – COFERETEL-) ante la Corte Primera del circuito de Gorgia alegando la violación al derecho a la información. La Corte primera tutela el derecho y ordena al Servicio de Radio Difusión responder de fondo las solicitudes de ACOSINTI. En su respuesta señala que la entidad cuenta con discrecionalidad para determinar cuándo, cómo y bajo qué condiciones debe abrirse una convocatoria pública lo cual es una atribución legal, pues obedece a las características particulares del espectro electromagnético y a las exigencias técnicas de adjudicación, así como al principio de oportunidad que rige las actividades de la administración.

16. De forma paralela al “Facebookazo”, simpatizantes del gobierno de Escalante decidieron organizar una marcha y diferentes concentraciones con el fin de manifestarle su apoyo. El Presidente Municipal de San Pedro de los Aguados dispuso de toda la Guardia Federal para evitar disturbios durante la jornada del 3 de marzo. Sin embargo la mala publicidad que de la segunda marcha y de las opiniones del gobierno hizo Radio Su-versión enardeció a los manifestantes del Facebookazo, llevándolos a pensar que ésta sustituiría su lugar de concentración (La plaza central) en dicha municipalidad y por tanto tomaron medidas de cambio de ruta a última hora por calles no autorizadas, que además coincidían con la ruta de la marcha simpatizante al gobierno.
17. Cegados por la furia, los rebeldes se abalanzaron con palos y piedras contra la Guardia Federal, dejando como saldo cinco civiles y un policía muertos y cinco oficiales con graves heridas.

18. A pesar de los hechos violentos narrados anteriormente el 10 de marzo de 2008 se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias en las cuales se incluyó la Papeleta de la democracia y se obtuvo una amplia victoria del Gobierno Escalante, sin embargo la oposición logró su objetivo, en tanto al generarse en días pasados un clima de zozobra y violencia, se obtuvo un nivel de abstencionismo del 70%, pues la población estaba atemorizada de acudir a las urnas.
19. Chirilagua no tuvo tregua en su clima de violencia ni aún el día de las elecciones, como consecuencia un grupo de 25 jóvenes pretendieron atacar las instituciones democráticas al adelantar actuares violentos intentado quemar una de las urnas ubicadas en la plaza principal de San Pedro de los Aguados, lo cual dejó como saldo 3 personas fallecidas.

2.2 Medidas adoptadas por el Gobierno como consecuencia del Facebookazo.

20. Al día siguiente de perpetuados los hechos del Facebookazo (4 de marzo de 2008) El Estado manifestó que adoptaría medidas para castigar a los responsables de la desestabilización de la Nación y la democracia. Señaló además como responsables de los mismos a los organizadores de la marcha del Facebookazo y a los medios de comunicación que los apoyaron incitando a la sociedad civil a actuar violentamente.
21. Como primera medida, el gobierno en cabeza de COFERETEL, adelantó una revisión general de las concesiones de radio y televisión, la cual sería el primer paso para la formulación de una política igualitaria en el acceso al espectro electromagnético. Como consecuencia de esta revisión el 6 de abril de 2008 se dispuso el cierre de 40 concesiones

otorgadas a emisoras de radio, en tanto éstas no cumplían con los requisitos dispuestos por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (L-56 de 1976), dentro de las concesiones canceladas se encontraba la conferida a Radical Radio, específicamente por incumplimiento al artículo 92 de dicha ley. Asimismo se ordenó el cierre inmediato de todas las emisoras ilegales y la confiscación de sus equipos, dentro de éstas se encontraba Radio Su-versión a la cual le fueron confiscados los equipos el 19 de abril de 2008.

22. La Comisión comunicó además, luego de realizada la debida investigación, que tomaría acciones penales a razón del uso abusivo del espectro electromagnético, conforme a lo cual el 25 de junio de 2008 el Ministerio Público imputó a alrededor de 30 personas, entre los cuales se encontraban Byron Dayle (Cofundador de Radio cadena básica, hoy Radical radio, junto a la difunta María Luisa Peroni, madre de Melanie Pereira Peroni), Melanie Pereira Peroni (accionista y directora de Radical Radio) y Francis Hoffman (representante legal de Radio Su-versión) por la supuesta comisión del delito de “hurto de bienes del Estado”, a razón del usufructo ilícito del espectro electromagnético.

23. Del mismo modo el 30 de junio del mismo año el Ministerio Público imputó a Melanie Pereira Peroni y Francis Hoffman la presunta comisión del delito de “instigación a delinquir”, en relación al contenido de los programas relativos al Facebookazo². Finalmente el 2 de junio de 2008 se imputa al señor William Garra (periodista y locutor de Radical Radio) por la presunta comisión de los delitos de instigación a delinquir,

² Supra párrs. 10,11 y 12.

difamación y homicidio en perjuicio de dos civiles y un oficial de la policía, muertes ocurridas el 3 de marzo de 2008.

24. El 10 de abril de 2008 Bayron Dayle demandó ante el juez administrativo con la pretensión de que se declarara la nulidad del acto administrativo que ordenó la cancelación de la concesión a Radical Radio, demanda que fue admitida el 15 de agosto de 2008, fecha en la cual se corrió traslado a COFERETEL. El proceso se encuentra en etapa probatoria desde el 15 de enero de 2009.
25. El 30 de abril de 2008 Byron Dayle y Melanie Pereira Peroni presentaron una acción de constitucionalidad ante el Segundo Tribunal del Circuito de Cedralópolis alegando la violación de sus derechos al debido proceso, a la libertad de expresión, opinión y empresa, a la información así como el derecho a la participación democrática de la comunidad de Chirilagua, esto a razón de la cancelación de la concesión otorgada a Radical Radio. La acción de constitucionalidad fue presentada como mecanismo transitorio de acuerdo a la jurisprudencia constitucional de Chirilagua. El 15 de mayo del mismo año el Segundo Tribunal del Circuito denegó el recurso argumentando que la cancelación de dicha concesión se realizó en pleno cumplimiento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, además no se observaba violación evidente al debido proceso. Los accionantes apelan la decisión y el 2 de julio de 2008 la Corte Primera de Apelaciones (última instancia) confirma la decisión en los mismos términos del Tribunal.
26. El 5 de mayo de 2008 Francis Hoffman presentó una acción de constitucionalidad alegando la vulneración a los derechos a la libertad de expresión, información y propiedad

a razón del cierre de la emisora Radio Su-versión y el decomiso de los equipos pertenecientes a la misma. Asimismo alega la violación al debido proceso administrativo en relación a la confianza legítima de ACOSINTI³ y sus afiliados individualmente considerados. El Tribunal niega el recurso el 26 de mayo del mismo año al considerar la actuación estatal conforme a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Se interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Gorgia el cual confirmó la sentencia el 15 de junio de 2008.

27. El 14 de julio de 2008 el Ministerio Público acusó ante el Primer Juzgado Criminal de Delitos Federales a Melanie Pereira Peroni, Bayron Dayle y Francis Hoffman por el delito de hurto de bienes del Estado. El 8 de noviembre del mismo año el Primer Juzgado suspendió el proceso contra Bayron Dayle por falta de pruebas, y condenó a Melanie Pereira Peroni y Francis Hoffman a pena de dos años de prisión, la cual podría ser conmutada por una multa equivalente a USD 200.000 (80 salarios mínimos legales mensuales del país). Dicha sentencia fue apelada, sin embargo ésta fue reiterada por el Tribunal Criminal de apelaciones el 25 de noviembre de 2008.

28. El 20 de julio de 2008 el Ministerio Público acusó a Melanie Pereira Peroni, Bayron Dayle y Francis Hoffman por los delitos de Instigación a delinquir y difamación en perjuicio del Presidente Atilio Escalante Norris. En fecha 15 de septiembre del mismo año el Tercer Juzgado Criminal de Delitos Federales declaró responsables a Melanie Pereira Peroni y Francis Hoffman de los delitos mencionados, y los condenó a seis meses de

³ Organización social, propietaria de la emisora Radio Su-versión, por medio de la cual se pretende mantener informadas a las municipalidades de Crambacrópolis y San Pedro de los aguados sobre las políticas, servicios y programas del Estado.

prisión conmutables por una multa de USD 15.000; los condenados apelaron la decisión, sin embargo ésta fue confirmada en su totalidad. El Tercer Juzgado Criminal de Delitos Federales absolvió a Bayron Dayle de los cargos imputados.

29. Finalmente el 25 de julio de 2008 la oficina del Ministerio Público acusó a William Garra por los delitos de instigación a delinquir, difamación y homicidio ante el Tercer Juzgado Criminal de Delitos Federales, el cual lo condenó a pena de prisión de 12 años por su responsabilidad en los mencionados delitos. La sentencia fue apelada por sus abogados, más se confirmó el 1 de diciembre de 2008.

2.3 Procedimiento ante el Sistema Interamericano

30. El 2 de diciembre de 2008 la Federación Interamericana de Medios por la democracia presentó ante la CIDH una petición alegando la presunta violación de los derechos contenidos en los Arts. 7, 8, 13, 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto de la obligación de respeto y garantía contenida en el art. 1.1 de la misma. Todo esto en perjuicio de las emisoras Radical Radio y Radio Su-versión, la señora Melanie Pereira Peroni, los señores Francis Hoffman y William Garra, así como toda la población de Chirilagua.
31. El 15 de diciembre de 2008 la CIDH tramitó la petición y trasladó al Estado las partes correspondientes otorgándole a éste dos meses para emitir una respuesta. El 15 de enero de 2009 el Estado de Chirilagua presentó su respuesta en la cual señalaba en primer lugar no haberse efectuado violaciones a Derechos Humanos en tanto todas las actuaciones

estatales fueron realizadas bajo la normatividad vigente del país. En segundo lugar El Estado precisó la imposibilidad de admitir el caso en tanto personas jurídicas no pueden acudir ante la protección del Sistema Interamericano. Argumentó además que se encontraba pendiente en la jurisdicción interna un proceso ante lo contencioso administrativo. Finalmente resaltó el hecho de haberse aprobado recientemente una nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones la cual permitiría la asignación tripartita de licencias, lo cual aseguraría espacios equitativos para estaciones comunitarias, comerciales e institucionales; asimismo y conforme a la emisión de dicha ley a partir de enero de 2010 se daría paso a una convocatoria abierta para otorgar licencias.

32. La CIDH decidió adoptar un informe conforme a su reglamento declarando admisible el caso y encontrando en él violaciones a los arts. 8 garantías judiciales, 13 libertad de pensamiento y expresión y 25 protección judicial, todos ellos en relación al art. 1.1 correspondiente a la obligación de respetar los derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
33. El caso fue sometido ante la jurisdicción de la H. Corte IDH el 25 de diciembre de 2009 en tanto fueron cumplidos los plazos y requisitos establecidos en la Convención Americana de sobre Derechos Humanos así como en el Reglamento de la CIDH, teniendo en cuenta además que el Estado no realizó ninguna acción tendiente al cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.

34. Por su parte los representantes de las víctimas reiteraron su voluntad de tener en cuenta en el caso presentado ante la H. Corte IDH a las emisoras Radical Radio y Radio Su-versión como presuntas víctimas.

3. ANÁLISIS LEGAL DEL CASO

3.1 Criterios preliminares de admisibilidad.

3.1.1 Primera excepción: Falta de agotamiento de recursos internos. Art.46 literal a.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

35. Conforme al Art. 46.a. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 31 del Reglamento de la CIDH es requisito indispensable para la admisibilidad del caso por parte de la CIDH, el agotamiento de los recursos internos de acuerdo a los principios de derecho internacional. Asimismo en ambos artículos se señalan tres supuestos en los cuales no será necesario aplicar el requisito. En primer lugar la no existencia de un procedimiento dentro de la legislación interna para la protección del derecho vulnerado, en segundo lugar que se le haya impedido al presunto lesionado su posibilidad de acceder a la jurisdicción o incluso al acceder no haya sido posible agotar los recursos disponibles, y finalmente que se presente un retardo injustificado en la decisión de los recursos garantes del derecho vulnerado.

36. Ninguno de los supuestos anteriormente mencionados son aplicables al presente caso en tanto Chirilagua cuenta con mecanismos de garantía y tutela de los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los demás tratados internacionales de los cuales es parte. Para citar algunos de los mecanismos se señalan la acción de constitucionalidad y el proceso contencioso administrativo. El primero de ellos agotado en su totalidad por los representantes de Radical Radio y Radio Su-versión y el segundo se encuentra en etapa probatoria desde enero de 2009.⁴ Se evidencia pues la posibilidad de acceso a la justicia que tuvieron los presuntos afectados, así como la posibilidad de agotamiento de los recursos, ya que respecto al proceso contencioso administrativo se ha iniciado el agotamiento pero éste no ha concluido aún. Finalmente no considera El Estado que exista retardo en el proceso en curso pues las fases se han desarrollado con considerable rapidez.⁵

37. El Estado considera incumplido el requisito en cuestión. Por tanto excepciona la admisibilidad del caso por parte de la CIDH ya que aún se encuentra en curso un proceso administrativo ante la jurisdicción competente, en el cual se pretende lograr el restablecimiento del derecho a la libertad de expresión por vía de declarar la nulidad del acto administrativo que canceló la concesión a la emisora Radical radio.

⁴ Supra párrs. 15, 24, 25 y 26.

⁵ Infra párrs. 52 y 53.

3.1.2 Segunda Excepción: Improcedencia del caso ante la jurisdicción de la Corte IDH por tratarse de personas jurídicas acudiendo en calidad de víctimas ante la protección del Sistema Interamericano. Art. 1 inciso 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos

38. Ha señalado la CIDH⁶ en relación a la interpretación del art.1 inciso 2 de la Convención Americana, en el cual se declara que para los propósitos de dicho instrumento, ‘persona’ significa todo ser humano’, que la Convención otorga su protección a las personas físicas o naturales, excluyendo de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas o ideales, por cuanto éstas son ficciones jurídicas sin existencia real en el orden material.

39. La H. Corte IDH⁷ así como la CIDH⁸ han sido reacias a admitir la posibilidad de incluir como víctimas dentro de un proceso del Sistema Interamericano a personas jurídicas como tales, esto en tanto no son cubiertas por el ámbito de protección de la Convención Americana. Así pues se concluye que de ocurrir una violación ésta recaerá sobre los sujetos que componen la persona jurídica más no sobre el ente en particular.

40. Teniendo en cuenta lo anterior no tiene sentido hablar de las emisoras Radical Radio y Radio Su-versión como presuntas víctimas dentro de este proceso tal como lo señalan

⁶ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe N° 10/91 del 22.II.1991, Banco de Lima – Perú considerandos 1 y 2. Así como también en el Informe N° 39/99 del 11.III.1999, Mevopal, S.A.- Argentina, párr. 17. Se evidencia la misma posición de la CIDH en el Informe N° 47/97 Tabacalera Boquerón S.A vs. Paraguay. 16 de octubre de 1997. Párr. 25.

⁷ Corte I.D.H., Caso Cantos. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85. Párr. 25 y 29.

⁸ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe No. 67 del 14 de junio de 2001. Caso 11.859. Tomás Enrique Carvallo Quintana vs. Argentina. Párr. 56

insistentemente sus representantes. Lo que si puede considerarse válido es el examen de la presunta violación a derechos en cabeza de las personas naturales que componen las personas jurídicas antes mencionadas, tal y como fue señalado por CIDH en su informe de admisibilidad relativo al presente caso.

3.2 Cuestiones de fondo.

3.2.1 Violación a los derechos contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación a los artículos 1.1 y 2 de la misma. Derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales.

41. El Estado de Chirilagua al configurarse como una República democrática que propende por la protección de los derechos de sus ciudadanos, coincide con el planteamiento de la H. Corte IDH⁹ cuando señala que acceder a la justicia de una forma efectiva, constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática.

42. Dicha posibilidad, que corresponde intrínsecamente con las garantías básicas de los seres humanos, se materializa en el momento que los Estados incluyen dentro de su

⁹ Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000,(Fondo). Párr. 163; Caso Durand y Ugarte, supra nota 45, párr. 101; Caso Castillo Petruzzi y otros, supra nota 9, párr. 184; Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 9, párr. 164; Caso Blake, supra nota 11, párr. 102; Caso Castillo Páez, supra nota 12, párrs. 82 y 83 y Caso Suárez Rosero, supra nota 10, párr. 65.

ordenamiento jurídico mecanismos de protección de los derechos humanos, así como también al no incluir barreras significativas al acceso a la justicia.

43. Como lo ha reiterado en variadas ocasiones la H. Corte IDH¹⁰ no basta con la existencia formal de dichos mecanismos en la legislación nacional, sino que deben ser realmente idóneos, permitiendo un debido proceso que garantice dirimir el conflicto intersubjetivo de intereses en cuestión.

44. Al tenor del art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante el juez competente, que lo ampare ante actos que violen sus derechos humanos. En este contexto los Estados parte tienen la obligación de garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos de la persona que ha interpuesto un recurso, asimismo debe desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y finalmente garantizar el cumplimiento de toda decisión proferida por un juez.

45. En complemento a lo anterior señala el art. 8 de la Convención Americana que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y bajo un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad en la ley.” Gozan de dicho derecho aquellas personas acusadas penalmente, así como quienes

¹⁰ Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 113; Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 136, y Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 164; Corte IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Sentencia de 17 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párr 61

se encuentran en cierta situación jurídica indeterminada frente a sus derechos y obligaciones de orden laboral, civil, fiscal o de cualquier otro carácter.

46. Asimismo señala dicho artículo la necesidad de tener ciertas garantías mínimas tales como la comunicación previa acerca de la acusación, la posibilidad de defenderse personalmente o acudir a un defensor de su preferencia, el derecho de apelar el fallo ante juez o tribunal superior, entre otras muchas garantías.
47. El Estado de Chirilagua garantizó todos y cada uno de los derechos anteriormente mencionados, lo cual se desprende en primer lugar de haber brindado a los procesados un juicio acorde a los procedimientos establecidos en la legislación garantista de Chirilagua, entre los cuales puede señalarse la realización de una exhaustiva investigación previa a la imputación del delito de hurto de bienes del Estado a los señores Melanie Pereira Peroni, Bayron Dayle y Francis Hoffman¹¹; además se brindó la posibilidad de contar con abogados, garantizándose así el derecho a la defensa de los procesados¹²; asimismo se dio lugar a otros procedimientos implementados por las partes procesales.
48. En segundo lugar, El Estado rige su actuar conforme a los principios generales del derecho penal, lo cual puede evidenciarse en tanto se sobreseyó el proceso penal por el delito hurto de bienes del Estado frente a Byron Dayle, en otras palabras en caso de dudas frente al procesado se prefirió su absolución, lo cual no solo plasma el cumplimiento del

¹¹ Supra párr. 21

¹² Supra párr. 29

principio *in dubio pro reo* sino la prevalencia de la presunción de inocencia frente al procesado.

49. Coincide el Estado con la H. Corte IDH¹³ cuando se señala el derecho a la presunción de inocencia como un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa el cual acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede en firme.
50. Considera El Estado de vital importancia resaltar la posibilidad de apelar todas y cada una de las decisiones proferidas por los tribunales nacionales, la cual fue agotada por los condenados en la totalidad de sus procesos.¹⁴ Así pues se profirieron sentencias en segunda instancia de cada uno de los procesos en los cuales se encontraban vinculados Francis Hoffman, Melanie Pereira Peroni, William Garra y Byron Dayle, sentencias que a pesar de no fallar a favor de éstos no pueden considerarse como vulneradoras del derecho a la protección judicial (art.25.2-a de la Convención) pues el recurso judicial existe en la legislación, efectivamente fue agotado y dirimió el conflicto intersubjetivo de intereses en cuestión.
51. Pretender que el derecho a la protección judicial requiera un fallo afirmativo a todas y cada una de las pretensiones presentadas ante la jurisdicción, sería condicionar el fallo del

¹³ Cfr. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, Sentencia de 31 de agosto de 2004. (Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 154

¹⁴ Supra párrs. 25, 26, 27, 28 y 29.

juez, así como hacer desaparecer las características puras de éste ente en un Estado democrático, es decir convertirlo en un juez parcial y dependiente.

52. Finalmente considera relevante el Estado señalar la eficiencia con la cual transcurrieron todos y cada uno de los procesos concluidos, tanto aquellos de carácter penal como las acciones de constitucionalidad interpuestas por Melanie Pereira Peroni, Byron Dayle y Francis Hoffman. Así pues en los procesos penales por el delito de hurto de bienes del Estado a los implicados se les resolvió su situación jurídica, incluyendo la segunda instancia, en un total de 5 meses. Los procesos por los delitos de instigación a delinquir y difamación en perjuicio del Presidente de la República, incluyendo el agotamiento del recurso de apelación, se concluyeron en el lapso de 3 meses, mientras el proceso relativo al señor William Garra por los delitos anteriores y en concurso con un homicidio simple, incluyendo el recurso de apelación, fue concluido en 5 meses.¹⁵ Promedios estos propios de la eficiente rama judicial de Chirilagua.

53. Por su parte los procesos de constitucionalidad, incluyendo el agotamiento del recurso de apelación, fueron concluidos en el rápido término de un mes.¹⁶ El proceso contencioso administrativo, que se encuentra en etapa probatoria¹⁷, se ha ajustado al tiempo estimado para los procesos de dicha naturaleza dentro del giro ordinario de la jurisdicción administrativa Chirilagüense, los cuales pueden tardar entre 4 y 6 años para la emisión de

¹⁵ Supra párrs. 27, 28 y 29.

¹⁶ Supra párrs. 25 y 26

¹⁷ Supra párr. 24

una decisión de segunda instancia. Es decir que los dos años transcurridos hasta el momento en las etapas regulares de dicho proceso corresponden al momento procesal en el cual se encuentra el litigio, pues habiéndose agotado las cuatro etapas previas a la conciliación judicial sólo restan los alegatos finales y la sentencia del juez.

54. En consideración a lo anterior el Estado sugiere respetuosamente a la H. Corte IDH que realice el test de razonabilidad respecto al plazo de los diferentes procesos concluidos y por concluir que ha consagrado en su jurisprudencia,¹⁸ el cual debe tener en cuenta: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales, considerando claro está, las circunstancias particulares del presente caso.

3.2.2 Violación al derecho contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a los artículos 1.1 y 2 de la misma. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

55. Conforme al art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y acorde al desarrollo jurisprudencial de la H. Corte IDH¹⁹, el contenido del derecho a la libertad de

¹⁸ Entre otros casos: Corte IDH Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 141; Caso 19 Comerciantes, supra nota 2, párr. 190; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 143; y Caso Suárez Rosero, supra nota 140, párr. 72. En igual sentido Eur Court H.R., Motta v. Italy, Judgment of 19 February, 1991, Series A No. 195-A, para. 30; y Eur Court H.R., Ruiz-Mateos v. Spain, Judgment of 23 June, 1993, Series A No. 262, para. 30.

¹⁹ H. Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, serie A, N5. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C, núm. 111, Párr. 77 al 80. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia de 19 de septiembre de 2006, serie C, núm. 151, Párr. 75, 76 y 77. Caso López Álvarez vs. Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006, serie C, núm. 141, Párr. 163. Caso Palamara Iribarne vs. Chile,

pensamiento y expresión tiene dos dimensiones, una individual y otra social las cuales deben garantizarse simultáneamente. En cuanto a la primera:

“la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.”²⁰

En complemento la dimensión social señala que “la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Implica el derecho de todos a conocer opiniones y noticias.”²¹

56. En cuanto al papel que juega la libertad de pensamiento y expresión en una determinada sociedad cabe resaltarla como piedra angular de la democracia, en tanto cuestiones como la crítica política permiten forjar la opinión pública y ser un mecanismo de control de la transparencia en las políticas del Estado.

57. A razón de su importancia dentro de una sociedad democrática, la Convención Americana sobre Derechos Humanos le ha otorgado como garantía al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, el no poder estar sujeto a censura previa bajo ninguna circunstancia.

sentencia de 22 de noviembre de 2005, serie C, núm. 135, Párr.69. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004, serie C, núm. 107, Párr.108 al 111.

²⁰ García Ramírez, Sergio. Gonza, Alejandra. La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos. Corte Interamericana de Derecho Humanos, Comisión de derechos humanos del distrito federal. Edición 2007. Párr. 31

²¹ Ibidem Párr. 32

58. Sin embargo, como todo derecho, la libertad de pensamiento y expresión se encuentra limitada en algunas ocasiones, pues “[...] no debemos cegarnos ante el idilio romántico que nos ofrece la “libertad de prensa” más absoluta, ya que [...] bajo el paraguas de la crítica política, se esconde también la estrategia de desprestigio y entorpecimiento de actos de gobierno, que corruptamente son utilizados, por desgracia, también bastante a menudo.”²² Es así como la Convención permite, en el inciso segundo del art. 13, la aplicación de medidas penales, civiles o administrativas, como responsabilidad ulterior, las cuales deben estar expresamente fijadas por la ley y ser estrictamente necesarias para asegurar el respeto a los derechos y la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral pública.

59. Respecto a la pugna entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la Honra de los funcionarios públicos ha señalado la H. Corte IDH en el caso Herrera Ulloa que:

“las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del art. 13.2 de la Convención, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. Esto no significa, de modo alguno, que el honor de los funcionarios públicos

²² Bertoni, Eduardo Andrés. Libertad de expresión en el Estado de derecho: doctrina y jurisprudencia nacional, extranjera e internacional. 2ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Del Puerto, 2007. Pág.66 (Subraya fuera del texto)

o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático.”²³

60. Así entonces el Estado no desconoce que el debate político que se da lugar en relación con quienes ocupan cargos públicos puede contener discursos críticos e incluso ofensivos sin configurar violación alguna a su derecho a la honra; sin embargo ésta aplicación amplificada no puede llegar a configurarse como una amenaza evidente y directa a la vida del funcionario, más aun si éste cumple el papel de jefe supremo del Estado, pues esto conllevaría a un episodio de violencia anárquica que compromete la estabilidad institucional del país.

61. Como supuestos hechos vulneratorios del derecho a la libertad de expresión se señalan el cierre de las emisoras Radical Radio y Radio Su-versión y en segundo lugar la posterior responsabilidad penal a causa de las declaraciones realizadas en los programas²⁴ previos y concomitantes a los hechos del Facebookazo.

62. El primero de dichos hechos no puede ser considerado como una violación al derecho a la libertad de expresión en tanto el procedimiento de cancelación de las licencias de radio difusión así como el cierre de las emisoras ilegales, se encontraba acorde a la legislación Chirilagüense.

63. Así pues las condiciones para acceder a una licencia de radiodifusión se encuentran claramente desarrolladas por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la cual es de

²³ H. Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 128

²⁴ Supra párrs. 11 y 12

conocimiento público, garantizándose así la igualdad de oportunidades en el manejo de los requisitos que posibilitan el acceso a una convocatoria pública para la concesión del servicio de radio difusión sonora. El hecho de no cumplir una emisora con alguna de dichas condiciones y por lo tanto no poder acceder a una licencia de radio difusión, no hace responsable al Estado, pues la posibilidad de acceso se encuentra abierta a todos los particulares, simplemente se hace necesario focalizar el otorgamiento de licencias para garantizar el correcto uso del espectro electromagnético.

64. Del mismo modo se encuentra regulada dicha materia en una ley general expedida por la rama legislativa del poder público, se entiende pues que al ser elegidos por elección popular los miembros de dicho órgano colegiado cuentan sus decisiones con carácter representativo, es decir que los Chirilagüenses estuvieron representados a la hora de expedirse la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y por lo tanto ésta busca garantizar, entre otras cuestiones, sus intereses.
65. Con la cancelación de las licencias de radio difusión sonora, el cierre de las emisoras ilegales y la confiscación de sus equipos, el Estado actuó de acuerdo a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (ley 56 de 1976), lo cual no es más que actuar conforme a lineamientos del Estado de derecho, es decir dirigiendo sus actuaciones al cumplimiento de la ley.
66. Considera relevante señalar el Estado la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones la cual, conforme al principio de progresividad, busca mejorar cada vez más la garantía del derecho a la libertad de expresión al regular la concesión de

licencias de manera tripartita, lo cual asegura espacios equitativos para estaciones de radio comunitarias, comerciales e institucionales.

67. Respecto al segundo hecho presuntamente vulneratorio del derecho en cuestión cabe resaltar en primer lugar que con el fin de contar con un ordenamiento jurídico acorde a la Convención Americana y a los demás tratados internacionales de Derechos Humanos²⁵ ratificados por Chirilagua, los cuales forman el marco de referencia concertado internacionalmente, El Estado no ha incluido en su legislación medidas tendientes a censurar previamente la libertad de prensa, opinión u expresión. A pesar de esto sí se encuentra tipificada la difamación como límite a la libertad de expresión, cuando la conducta desplegada atente contra el honor o reputación de cierto individuo, o se le exponga al desprecio u odio público. Dicho delito busca proteger el derecho a la honra, el cual goza igualmente de reconocimiento en el art. 11 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos.

68. Pretender que el Estado no imponga límites a la libertad de expresión, sería desconocer la obligación que se deriva de los arts. 1.1 y 2 de la Convención Americana en relación al art. 11 de la misma, conforme a los cuales los Estados parte deben asumir medidas en su ordenamiento interno tendientes a la protección de todos los derechos contenidos en la Convención Americana.

69. Asimismo no contraría el ordenamiento jurídico del Estado de Chirilagua, al contener el delito de difamación, los presupuestos de la Convención Americana, en tanto se ha

²⁵ Declaración universal de los derechos del hombre, arts. 19 y 20. Pacto internacional de los derecho civiles y políticos, arts. 19 y 20.

ordenado en el pasado por parte de la H. Corte IDH la derogación del tipo penal de desacato, más en análisis referidos a los delitos de injuria, calumnias y difamación, como en los Casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica²⁶ y Ricardo Canese vs. Paraguay²⁷, no ha sido éste el mandato de la H. Corte IDH. Lo cual permite inferir que cuando se consagra de manera genérica la sanción penal y sin perjuicio de que en una aplicación desproporcionada puede existir vulneración al art.13 de la Convención Americana, el sólo hecho de estar contempladas como delito dichas conductas, no se traduce en un límite contrario a la Convención Americana.

70. No estima la H. Corte IDH²⁸ contraria a la Convención cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, pero esta posibilidad se debe analizar con especial cautela. Así:

“Para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 de la Convención garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho artículo.”²⁹

²⁶ H. Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

²⁷ H. Corte IDH, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas).

²⁸ H. Corte IDH. Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008, (Fondo, Reparaciones y Costas).

²⁹ H. Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas, párr. 46; Caso Herrera Ulloa, párrs. 121 y 123; Caso Palamara Iribarne, párr. 85, y Caso Claude Reyes y otros, párr. 91.

71. Conforme a esto considera el Estado que en el presente caso la imposición de la medida era absolutamente necesaria, en tanto se encontraban en juego el interés social y la seguridad nacional. Asimismo la gravedad de las conductas desplegadas por William Garra, Melanie Pereira Peroni y Francis Hoffman es evidente, pues podrían subsumirse en un supuesto de apología al odio nacional, incitación a la violencia y por esta vía se hizo posible la vulneración de otros derechos humanos tan fundamentales como la vida y la integridad personal.³⁰ Finalmente, en respeto del art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que consagra el principio de legalidad, el delito de difamación se encuentra tipificado³¹ de forma clara y precisa en el Código Penal Chirilagüense.

³⁰ Supra Párrs. 10, 11 y 12

³¹ “El que comunicándose con varias personas reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de 3 a 18 meses. Si el delito se cometiere en documento público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público, o con otros medios de publicidad, la pena será de 6 a 24 meses de prisión.”

4. PETITORIO

72. Conforme a los fundamentos anteriormente expuestos, solicita respetuosamente el Estado de Chirilagua a la H. Corte IDH que declare la no violación a los derechos a las garantías judiciales (art. 8), protección judicial (art.25) y a la libertad de pensamiento y expresión (art. 13) en perjuicio de Melanie Pereira Peroni, Francis Hoffman y William Garra. Y que como consecuencia de lo cual declare la ausencia de responsabilidad internacional del Estado de Chirilagua, dándose transito a cosa juzgada.